

59.^a REUNIÓN - Continuación de la 8.^a Sesión extraordinaria - Ab. 11 3 de 1919

PRESIDENCIA DE LOS Sres. Dr. D. PELAGIO B. LUNA
Y D. BENITO VILLANUEVA

Ministro presente: de Obras públicas: Dr. Pablo Torello.

Senadores presentes: Castañeda Vega Francisco, Del Valle Iberlucea Enrique, Echagüe Pedro A., Esteves Manuel I., García Luis, Garro Pedro A., González Joaquín V., Irigoyen Ignacio P., Iturbe Octavio, Linares Luis, Malbrán Carlos, Melo Leopoldo, Mendoza Eriberto, Olmichea Alcorta Pedro, Posse Justiniano, Roca Julio A., Torino Martín M., Villanueva Benito, Zabala Carlos.

Senadores ausentes: Con licencia: Albarracín Martín, Soto Pedro Numa. Con aviso: Civit Emilio, Guinazú Víctor S., Iturraspe Ignacio de, Molina Emilio, Patrón Costas Robustiano, Toran Erigido, Vidal Juan R.

SUMARIO

- 1.—Mensaje del poder ejecutivo urgiendo la sanción del proyecto de ley en revisión aprobando el convenio financiero con los gobiernos de Francia, Inglaterra e Italia.
- 2.—Proyecto de ley en revisión poniendo en vigencia por los meses de abril y mayo del corriente año el presupuesto y leyes impositivas para 1918. Se considera sobre tablas, aprobándose únicamente por el mes de abril.
- 3.—Asuntos entrados.
- 4.—Incidencia a consecuencia del despacho de la comisión de hacienda sobre el convenio financiero a que se refiere el número 1. Se resuelve solicitar informes del poder ejecutivo y señalar la sesión del sábado 5 del corriente para considerarlo.
- 5.—Continúa la consideración del despacho de la comisión de legislación en el proyecto en revisión sobre jubilación de los ferroviarios. Se aprueban los artículos 18 y siguientes hasta el final del proyecto.

—En Buenos Aires, a las 5 p. m. del día 3 de abril de 1919 dice el

Sr. Presidente. — Continúa la sesión con 19 senadores presentes.

1

MENSAJE

Venta de productos a los gobiernos
de Inglaterra, Francia e Italia

—Se lee:

Buenos Aires, marzo 31 de 1919.

Al honorable senado de la nación:

Concluidas las tramitaciones a que dió lugar el convenio celebrado por el poder ejecutivo con los gobiernos de Francia, de la Gran Bretaña y de Italia, se sometió al honorable congreso en la fecha misma en que fué suscripto. Desde entonces hasta ahora han transcurrido dos meses sin que aún haya alcanzado sanción definitiva.

Iniciadas las negociaciones en noviembre del año pasado, no dependió del gobierno argentino concluir las antes, pues estaban supeditadas a las contestaciones que dieran las otras potencias contratantes; hoy en cambio su solución depende exclusivamente de nosotros y los perjuicios que cause su retardo nos son también exclusivamente imputables; y el poder ejecutivo, ratificando las manifestaciones reiteradas, hechas por intermedio de sus ministros, considera de su deber llamar la atención de vuestra honorabilidad para prevenir la difícil situación que un retardo mayor podría acarrear.

Se trata de una ley que debe llenar su objeto en un momento determinado, pasado el cual o pierde su eficacia o lesiona grandes intereses.

El movimiento económico y financiero

Sr. Villanueva. — Yo no he presentado ese pliego, como una medida de obstrucción; lejos de mi espíritu, eso. Por consiguiente, adhiero a lo propuesto por el señor senador Irigoyen, porque tengo la convicción que en dos horas el poder ejecutivo puede remitir esos datos; por lo pronto, más de la mitad están ya en poder de la comisión.

Si estos datos, no estuvieran para la sesión del sábado, la cámara podrá lo mismo tratar el asunto; no hago cuestión al respecto.

Sr. Presidente. — Se va a votar si se designa la sesión del sábado para tratar este asunto.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda entonces fijada la sesión del sábado. Se va a pasar a la orden del día.

5

JUBILACION DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

Sesión permanente

Sr. del Valle Iberlucea. — Pido la palabra.

Hace un mes que está a consideración del senado el despacho de la comisión de legislación sobre jubilación de empleados y obreros ferroviarios.

Es hora ya entonces de terminar este asunto; por consiguiente hago indicación para que la cámara se constituya en sesión permanente, hasta concluir con la consideración del proyecto.

—Apoyado.

Sr. Presidente. — Habiendo sido apoyada la moción del señor senador por la capital, si no se hace uso de la palabra se votará si la cámara se constituye en sesión permanente, hasta terminar la consideración del asunto a que se ha hecho referencia.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Está en consideración el artículo 18 que no alcanzó a sancionarse en la sesión anterior.

—Véase el despacho de la comisión en el Diario de sesiones número 52.

—Ocupa su banca el señor ministro de obras públicas.

Sr. Presidente. — Como el artículo 18 sufrió modificaciones, se va a dar lectura de él en la forma aceptada por la comisión.

Artículo 18. — Corresponde la jubilación ordinaria dentro de las condiciones establecidas en el artículo anterior

1o. Integra: al empleado u obrero que habiendo prestado 30 años de servicio como mínimo tenga cincuenta años de edad.

2o. Reducida en un 25 o/o: al empleado u obrero que habiendo prestado treinta años de servicios como mínimo, tenga más de cuarenta y cinco y menos de cincuenta años de edad y desee jubilarse.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra se votará este artículo.

Sr. Melo. — ¿Con las modificaciones que aceptó la comisión?

Sr. Secretario Ocampo. — Se ha leído el artículo con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Si los demás artículos no fueran observados, la presidencia los dará por aprobados.

Sr. Zabala. — Pido la palabra.

No me he dado cuenta de lo que se ha votado en este momento, y por lo tanto, pido que se rectifique la votación del artículo 18.

Sr. Linares. — Desearíamos saber cuántos votos hubo en favor.

Sr. García. — No se ha oído nada, y por lo tanto no sabemos lo que se ha votado.

Sr. Presidente. — Se va a rectificar la votación del artículo 18.

Sr. Zabala. — No hay número.

Sr. Secretario Ocampo. — Se han retirado algunos señores senadores.

Sr. del Valle Iberlucea. — No corresponde la rectificación si no están presentes todos los señores senadores que han votado antes.

Sr. Linares. — Podría invitarse a los señores senadores que están en antessalas.

Sr. Presidente. — Se les ha mandado llamar.

Se va a rectificar la votación. El señor Irigoyen manifiesta que no ha votado en la primera votación recaída sobre el artículo 18.

Sr. Malbrán. — Yo tampoco he tomado parte en esa votación.

Sr. Mendoza. — Es una rectificación de la votación, y el señor senador puede ahora tomar parte.

Sr. Presidente. — El objeto de la presidencia, era, el de que ninguno de los señores senadores quedara privado de dar su voto.

Sr. Linares. — Quiere decir, que la cámara al votarlo no estaba en quórum.

Sr. Secretario Ocampo. — No, señor senador; había número.

Sr. Linares. — Entonces ¿quiénes son los que se han retirado?

Sr. Presidente. — Dos señores senadores. Se va a votar nuevamente: sírvase dar lectura el señor secretario.

Sr. del Valle Iberlucea. — Me permito observar, que tratándose de una rectificación, no corresponde que voten los señores senadores que no tomaron parte en la primera votación; se encontraban ausentes los señores senadores Malbrán, Irigoyen y Posse; fuera de ellos había 16 señores senadores, quiénes formaban quórum.

Sr. Mendoza. — No obstante eso, pueden votar ahora.

Sr. del Valle Iberlucea. — No pueden votar porque se trata de una rectificación.

Sr. Mendoza. — Si se tratara de una reconsideración, no podrían votar, pero en este caso, sí pueden votar.

Sr. del Valle Iberlucea. — Si no han votado en la votación anterior no pueden votar ahora en la segunda votación, porque se trata de una rectificación. Insisto, señor presidente, en que no pueden votar.

Sr. Linares. — No hubo número.

Sr. del Valle Iberlucea. — Había número, y el señor senador por Jujuy estaba presente y votó en contra.

Sr. Zabala. — No he votado; lo que hay es que se pasó de un asunto a otro, sin solución de continuidad.

Sr. del Valle Iberlucea. — Ha votado

en contra, o por lo menos ha permanecido sentado. Yo hago indicación para que la nueva votación sea nominal.

—Apoyado.

Sr. González. — Pido la palabra.

Yo creo encontrarme en la misma situación de ánimo de muchos señores senadores, es decir, en la duda, respecto a la condición de la votación. Yo no recuerdo, si estaba o no presente en la sesión en que se votó este artículo; pero, lo que sí necesito, es conocer la cuestión en la forma en que está planteada. Creo que algún otro señor senador, ha de estar en el mismo caso, de no darse cuenta cabal de lo que efectivamente va a votarse, para dar nuestro voto en un sentido o en otro; ahora si van a tomar parte los señores senadores que no han estado en la sesión anterior, creo que necesitamos informes sobre lo que en concreto se va a votar.

Sr. Presidente. — Se puede volver a leer el artículo, que está a consideración.

Sr. González. — Lo que no conocemos son los argumentos que se han expuesto sobre este artículo.

Sr. Roca. — Pido la palabra.

Yo no he vuelto a hacer uso de la palabra, en la sesión de hoy, con el propósito de abreviar el despacho de esta ley, que ya realmente es demorada en su sanción.

La controversia está planteada en los siguientes términos: la comisión de legislación, de acuerdo con el poder ejecutivo, sostiene que las jubilaciones deben concederse a los treinta años de servicios y cincuenta de edad. El señor senador por Salta, ha objetado el despacho de la comisión, pretendiendo que se vote la sanción de la cámara de diputados, que establece cincuenta y cinco años de edad y treinta y dos de servicios.

Está planteada, como he dicho, la divergencia en esos términos y supongo que el propósito del señor senador por La Rioja, no será renovar todo el debate producido en la sesión anterior del senado.

Sr. González. — No, señor senador.

Sr. Presidente. — Se va a proceder

a tomar la votación nominal del artículo en discusión.

—Votan por la afirmativa los señores senadores: del Valle Iberlucea, Oleachea y Alcorta, Iturbe, García, Castañeda Vega, González, Mendoza, Roca, Garro, Irigoyen, Villanueva, Melo y Torino.

—Votan por el despacho de la cámara de diputados, es decir, por la negativa del senado, los señores senadores: Esteves, Echagüe, Linares, Malbrán, Zabala y Posse.

Sr. Secretario (Ocampo). — Han votado por la afirmativa 13 señores senadores y por la negativa 5.

Sr. Presidente. — Queda sancionado el artículo.

—Se leen y aprueban sin observación los artículos 19, 20 y 21.

—Se lee el artículo 22.

Sr. Roca. — Donde dice 53, debe decir “50 años de edad” para estar de acuerdo con la sanción del artículo 18.

Sr. Presidente. — Se va a leer en esa forma.

—Se lee:

“Art. 22. — Corresponde la jubilación por retiro voluntario al empleado u obrero que teniendo más de 10 años de servicios y 50 de edad no alcance al número de años de servicios exigidos por el artículo 18.

Esta jubilación se calculará a razón de dos por ciento de la jubilación ordinaria, por cada año de servicios.

Sr. Presidente. — En la forma leída, se da por aprobado el artículo.

—Se lee el artículo 23.

Sr. Melo. — Pido la palabra, para una indicación que consiste en pedir que se sustituya la parte que dice: “igual al 5 por ciento de las sumas que hubiesen percibido en concepto de sueldos...” por la siguiente: “igual a las sumas aportadas por ellos al fondo de la caja...”

El fundamento de la sustitución es este: pueden los empleados u obreros no aportar el 5 olo; entonces resultaría

la disposición sin base y sin justicia.

Sr. Roca. — La comisión está perfectamente de acuerdo con la observación del señor senador.

Sr. Presidente. — Se va a leer el artículo tal como quedaría con la observación del señor senador, aceptada por la comisión.

—Se lee:

“Art. 23. — Los empleados u obreros que teniendo menos de 10 años de servicios alcanzan los 50 años de edad y dejen retirarse, tendrán derecho a una indemnización igual a las sumas aportadas por ellos al fondo de la caja, más los intereses a razón del cinco por ciento anual, capitalizados por año. En ningún caso se calcularán estos intereses con posterioridad a la fecha del retiro.”

—Se aprueba.

—Se leen y aprueban, sin observación, los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del despacho de la comisión.

—Se lee el artículo 30.

Sr. Melo. — Pido la palabra.

Con relación a este artículo, me voy a permitir también formular una indicación, que se encamina a aclararlo, y que es la siguiente: agregar al final las palabras: “Por cuya causa no se le exigirán los aportes establecidos en el artículo 9, con relación al nuevo empleo”. Si no se ha de tener en cuenta este nuevo destino para modificar la jubilación, justo es que no se le exija aporte. Si no se hace esta salvedad se les podría hacer contribuir nuevamente al fondo de la caja con el sueldo asignado al nuevo empleo.

Sr. Roca. — La comisión acepta la indicación porque le parece justa.

Sr. Presidente. — Se va a leer con la modificación.

—Se lee:

Artículo 30. — Unicamente los que hayan obtenido jubilación ordinaria podrán volver al servicio ferroviario. En este caso, el jubilado cesará en el goce de la jubilación y percibirá solamente el sueldo asignado al nuevo empleo. Abandonado éste, volverá al goce de la jubilación sin que pueda interponer reclamación alguna

para que le sea aumentada. Por cuya causa no se le exigirán los aportes establecidos en el artículo 9, con relación al nuevo empleo.

Sr. Presidente. — Si no se observa el agregado, y la comisión lo acepta, se dará por aprobado.

—Aprobado.

— Se lee y aprueba el artículo 31.

— Se lee el artículo 32.

Sr. García. — Pido la palabra.

No sé dónde ubicar una observación que deseo hacer, pero, por similitud, se me ocurre establecerla en este artículo. En la ley básica, el artículo 11, me parece, ha quedado firme; no ha sido derogado, y dice así: "Los empleados u obreros que voluntariamente abandonen sus servicios o los presten de modo que se interrumpa o perturbe la continuidad y regularidad de la marcha de los ferrocarriles, serán considerados como separados del servicio y deberán ser sustituidos, perdiendo todo el derecho que hubieran adquirido a las jubilaciones, pensiones o retiros a que esta ley se refiere y a los aportes que hubiesen hecho, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que hubiesen incurrido".

"Los empleados u obreros afectados por esta disposición tendrán derecho a reclamar ante la junta creada por el artículo 70. — este artículo 70. dice: "la administración de la caja estará a cargo de una junta de cinco miembros, nombrados por el poder ejecutivo en la siguiente forma: un presidente con acuerdo del honorable senado; cuatro vocales designados por mitad entre los empleados y representantes de las empresas. Su organización y funciones serán fijadas oportunamente por la ley orgánica de la institución". — El artículo 11 continúa: "Esta junta, constituida en tribunal, resolverá en definitiva, en cada caso, y tendrá facultad para eximir total o parcialmente de las sanciones establecidas en el párrafo anterior si a su juicio el abandono de servicio hubiese sido producido por causa mayor o causa justificada".

Creo que esta ley, que es tan cara,

como se ha demostrado, por los déficits que lleva implícitos, se abarataría en el concepto de los que la van a pagar, es decir, los productores, industriales, la ganadería, agricultura y sus derivados, si tuviera la efectividad a que ella tiende que es la estabilidad indispensable de los servicios ferroviarios. Sin esta estabilidad nos quedaremos con la ley cara y con la huelga que ella se propone conjurar con sus concesiones y liberalidades, en que todos los miembros de esta cámara de consuno estamos acordando.

Una junta compuesta de dos representantes de empleados ferroviarios y dos representantes de las empresas, presididos por uno nombrado por el ejecutivo, que, en definitiva, será el que resuelva esta grave cuestión de apelación — porque desde luego los otros cuatro votarán de acuerdo con los intereses de sus representados — cuestión que implica la separación del servicio de 20 ó 30.000 hombres que pudieran intentar una huelga, la pérdida de su jubilación, de las pensiones, y los aportes que hubieran hecho, no puede ofrecer garantías de independencia y autoridad.

Es una enormidad, repito, que un solo hombre pueda tener la obligación y responsabilidad de juzgar la separación del servicio, la pérdida de derechos de los aportes efectuados durante toda una vida, y establecer las demás responsabilidades en que incurran, sin tener la libertad y autonomía de otro medio extraño al ferroviario en que éste actúa, y la autoridad de juez letrado, como debe ser.

Es indispensable, pues, para que esta ley tenga una sanción efectiva, que es lo que la hará aceptable a los contribuyentes, que esta ley tenga sanción en un verdadero juez de derecho con las garantías, inmunidades y prerrogativas con que se ha revestido al poder judicial para autoridad e independencia de sus miembros.

¿Cómo es posible que un hombre que no es juez de derecho, que es lego, pueda aceptar todas estas responsabilidades y pueda en justicia resolver asuntos de esta trascendencia bajo la presión y amenaza de un gremio, den-

tro del cual existen agitadores que se han atrevido a todo en los últimos conflictos huelguistas?

Para lograrlo voy a proponer que sean apelables ante la suprema corte, — nó por la junta del artículo 70. — sino sobre el expediente que esta junta haya formado, o por lo menos, ante una cámara federal.

Esto será lo único que dará garantía y efectividad a esta ley, sanción en una palabra, porque me consta, por manifestaciones que se me han hecho, — y no porque sea contrario a esta ley que la he votado en la forma más amplia y más benéfica para los empleados y obreros — que hay el propósito de hacer sentir otra huelga para significar que estos movimientos no dependen de los que se llaman o alardean ser directores de los mismos, porque dentro del gran grupo de empleados y obreros hay agitadores de ideas avanzadas—para repetir una expresión de ellos, porque para mí no son ideas sino hechos delictuosos—que se proponen llevar a cabo ese movimiento.

Para concluir, repetiré, que lo único que puede hacer viable esta ley es la efectividad de los servicios, las garantías indispensables para tener ferrocarriles, telégrafos y demás servicios que la huelga interrumpe y que son indispensables para todas las manifestaciones de la vida civilizada.

Nada más.

Sr. Roca. — Pido la palabra.

La comisión de legislación, señor presidente, al estudiar el proyecto venido en revisión de la cámara de diputados, encontró en su texto una disposición, la del artículo 58 que establecía la derogación de la ley 9653, y de toda otra disposición en cuanto se opusiera a la de esta ley.

La comisión escuchó manifestaciones en el sentido de la conveniencia de mantener algunas de las cláusulas de la ley 9653, especialmente la del artículo 11, pero a la vez que se hacía esta observación y que se formulaban otras contrarias, la comisión entendió que en la ley reglamentaria del trabajo, que ha sido sancionada también por la cámara de diputados y que está en la co-

misión de legislación del honorable senado no incluída en las sesiones extraordinarias, pero sobre la que tendrá que pronunciarse en las sesiones del período próximo, está resuelta la cuestión a que acaba de hacer referencia el señor senador por Buenos Aires. Habrá llegado cuando se discuta la ley reglamentaria del trabajo la oportunidad de introducir en el articulado de la ley cláusulas como las que ha propuesto el señor senador por Buenos Aires, que tienden a asegurar las mayores garantías a los empleados y obreros ferroviarios, en cuanto a los beneficios que les acuerda la ley de jubilaciones y pensiones.

Por esa razón la comisión no ha tenido necesidad de pronunciarse expresamente sobre el artículo once de la ley básica, artículo respecto del cual puedo agregar, que tuve oportunidad de manifestar mi disidencia cuando se discutió en la cámara de diputados, en sentido análogo al que acaba de expresar el señor senador por Buenos Aires.

De manera, que la comisión ha entendido, que no es en esta ley, en la que debe introducirse el artículo propuesto por el señor senador, o algún otro equivalente, sino en la ley reglamentaria del trabajo que es la que legisla expresamente.

Sr. García. — Perfectamente; si no se legisla acá, se dejará esa laguna para llenarla en otra ley garantizando no sólo a los empleados, sino los demás importantísimos intereses sociales que la huelga hiere.

Sr. Roca. — Es la derogación de la ley número 9653, que es todo lo contrario.

Sr. García. — ¿Pero el artículo once queda firme en la ley básica?

Sr. Roca. — No, señor.

Sr. García. — ¿Está derogado?

Sr. Roca. — Sí señor; está derogado por la sanción de la cámara de diputados e implícitamente por el despacho de la comisión de legislación.

Sr. García. — ¿En ese caso está establecido ante quien debe apelarse?

Sr. Roca. — Eso viene articulado en la ley reglamentaria del trabajo, que

está a estudio del senado y que vino conjuntamente con esta ley.

Sr. García. — ¿Lo que se expresa aquí quedará modificado por esa ley?

Sr. Roca. — Sí, señor.

Sr. García. — En su oportunidad reclamaré el establecimiento de garantías suficientes, para que haya un juez capaz de asegurar los derechos que tanto los empleados como la sociedad afectada requiere.

—Se lee el artículo 33.

Sr. Zabala. — Pido la palabra.

El artículo 33 del proyecto, en cuanto dispone que no tendrán derecho a ser jubilados los que hubieran sido destituidos por mal desempeño de los deberes de su cargo o por abuso de bebidas alcohólicas durante el ejercicio del mismo, y los que hubieran sido condenados por sentencia judicial por delito que haya merecido pena de presidio o penitenciaría, no está de acuerdo con las doctrinas penales imperantes.

La pérdida de las jubilaciones o pensiones, no figuró como elemento de la pena de inhabilitación absoluta en el código penal argentino, ni en el proyecto de Tejedor.

Fué aceptada por la ley de reformas de 1903, que tomándola del código español de 1870, mandó añadir como inciso 4.º del artículo 75, que trata de la inhabilitación absoluta, la disposición siguiente: “La pérdida de toda jubilación, pensión, o goce de montepío de que disfrutare o pudiera corresponderle, salvo que tuviera familia que sostener”.

Fuera del código español, ningún código moderno en vigencia consigna semejante disposición.

Durante la elaboración del código italiano, sólo en dos proyectos se estableció la pérdida de pensiones, el de Vigliani de 1874 y del senado de 1875; pero nuevamente atacado por Paoli y Falco en la cámara de diputados, no figuró en el proyecto de Mancini y los que siguieron. Mancini manifiesta que la pena es una verdadera confiscación, que priva a la familia del condenado de lo que en ciertos casos y en

ciertas proporciones constituye un derecho de ella.

Pacheco—comentador del código español—critica esa disposición. “Las jubilaciones, los retiros—dice—esas pensiones y derechos que se ganan por un número considerable de años, o por haberse inutilizado sirviendo al público, toda legislación bien ordenada debe reputarlas una propiedad y respetarlas y considerarlas como se respeta y considera a esta. Es interés del servicio hacerlo así; es utilidad pública el elevar un muro delante de esos derechos para que nunca, ni por ninguna causa, se los toque. Nosotros miramos su apoderamiento por la sociedad como miraríamos el de cualquiera otras propiedades; parécenos una confiscación y la condenamos cual condenaríamos esta”.

El ex senador por la provincia de Catamarca, don Julio Herrera, en su notable obra “La reforma penal”, estudiando esta cuestión, con referencia a la ley 4349 relativa a la caja de pensiones y jubilaciones civiles, dice: “el carácter confiscatorio de esta penalidad, es tanto más evidente entre nosotros, cuanto que la caja de jubilaciones y pensiones se forma entre otros recursos por el descuento de una cuota, parte del sueldo del empleado (Ley 4349 artículo 4.º) de manera, que no es exclusivamente una liberalidad del estado, sino dentro de ciertos límites una propiedad de aquel, como lo declara terminantemente la segunda parte del artículo 1.º de la ley. Pero aunque así no fuera, el funcionario que ha llenado todas las exigencias de la ley, tiene un derecho adquirido a la jubilación que no puede ser desconocido”.

“Nos explicaríamos,—agrega,— que el derecho a la jubilación o pensión, se perdiese por mal desempeño o delito cometido durante el ejercicio de las funciones, porque entonces, en realidad, no existiría un derecho adquirido, sino una mera expectativa que la ley puede dejar sin efecto, previa, sin embargo, la devolución del importe de los descuentos hechos al sueldo del empleado o su aplicación a la indemnización civil.

“Sostiene — por último — que esa penalidad pesará exclusivamente sobre la familia del condenado, la que quedando sin los recursos que su jefe le proporcionaba, será la única sacrificada; y que un castigo, que pesa sobre los inocentes, y no sobre el culpable, es contrario a los principios fundamentales de la ciencia; y que la razón, la justicia y el mismo interés social, exige precisamente todo lo contrario: que el estado vaya en socorro de la familia del culpable insolvente, allegándole los recursos necesarios a su subsistencia”.

Fundado en estas consideraciones y traduciendo el pensamiento de los autores que he citado, voy a presentar un artículo en substitución del 33, cuya lectura pido se de por secretaría.

—Se lee:

“Art. 33. — Los empleados u obreros que no tuvieran familia que sostener, que hubieran llenado las condiciones exigidas para tener derecho a ser jubilados, y que antes de serlo fueran destituidos por mal desempeño de los deberes de sus cargos o por abusos de bebidas alcohólicas durante el ejercicio del mismo, o condenados por sentencia judicial por delito que haya merecido pena de presidio o penitenciaría, no serán jubilados; pero se les devolverá el importe de los descuentos hechos a sus sueldos, siempre que no hubiera lugar a aplicarlo a la indemnización civil del daño causado.

En caso de tener familia que sostener no se devolverá al penado el importe del descuento hecho a sus sueldos; pero gozarán de la pensión que corresponda a la jubilación perdida las personas que tengan derecho a ella con arreglo a esta ley.

Las circunstancias de la destitución deberán ser comprobadas en los expedientes —ante el directorio de la caja— que se promuevan en cada caso con sujeción a los reglamentos que el poder ejecutivo deberá dictar al efecto.”

Sr. Roca. — Pido la palabra.

La comisión de legislación tuvo oportunidad de conocer privadamente, por una deferencia del señor senador por Jujuy, la reforma que iba a proponer al artículo 33, así como los informes en que se apoyaba. Estudiadas las modificaciones por la comisión de legislación, ésta tuvo oportunidad de expresar al señor senador por Jujuy que no tendría inconveniente en adherir a la

modificación, en el curso de la discusión particular. De modo que, con estas palabras, dejó establecido que la comisión acepta lo propuesto por el señor senador por Jujuy.

Sr. Zabala. — Antes de que se vote el artículo, debo hacer presente que su reforma va a traer como consecuencia necesaria; el restablecimiento del concepto del inciso 3 del artículo 33, porque no está comprendido dentro de la reforma que propongo. El inciso tercero del artículo 33, tal como está, en el despacho en discusión, dice: “no tendrán derecho a ser jubilados: 3.º El que no solicitase su jubilación dentro de los cinco años siguientes al día en que dejó el servicio”.

Habría que cambiar la forma en que está redactado, sosteniendo el concepto: pero en forma de artículo nuevo; porque no cabe dentro de la redacción del artículo 33; o reemplazarlo por otra redacción, que yo propongo y que considero más clara:

“La acción para pedir la jubilación se prescribe a los cinco años, a contar desde el día en que se dejó el servicio”. Esto podría ir como artículo 34, y propondría lo siguiente: la jubilación vitalicia y el derecho a percibirla sólo se pierde por las causas establecidas en esta ley. Antes se perdía por las causas establecidas en el artículo 33: “El jubilado perderá todo derecho a jubilación si se domiciliase en el extranjero, sin recabar previamente permiso del congreso.

Sr. Presidente. — Será mejor que el señor senador proponga esas reformas a medida que se vaya presentando la oportunidad en la discusión.

Sr. Esteves. — Desearía saber si están comprendidos en el derecho a jubilación los que han incendiado trenes, los que en la obscuridad y el silencio de la noche, quitan o aflojan tornillos, cortan puentes y producen, así, catástrofes en que perecen tantos inocentes. Yo creo que para esos no pueden haber términos de conciliación. Para los empleados que faltan en otra forma, me explico, pero para los hombres que llegan a cometer atentados como los que hemos visto, no cabe esa magnanimidad de parte del senado...

Sr. Zabala. — Las leyes penales, aún tratándose de delitos que han merecido una pena aflictiva, no privan a las familias de la pensión.

Sr. Presidente. — Se va a dar lectura de la enmienda propuesta por el señor senador.

Sr. Roca. — Ahora procede introducirlo como artículo 34.

Sr. Zabala. — El artículo 33 que yo propongo suprime el encabezamiento.

— Se vota y aprueba.

Sr. Presidente. — El artículo 33, tal como lo propone el señor senador sustituye a todo el de la comisión. Sírvase leer el señor secretario el artículo 34, referente a la prescripción.

Sr. Prosecretario Guzmán Rodríguez. — (*Legendo*): “La acción para pedir la jubilación se prescribe a los 5 años, a contar desde el día en que se dejó el servicio”.

Sr. Melo. — Voy a proponer que se diga, en lugar de “La acción se prescribe”, lo siguiente: “El derecho para pedir la jubilación se extingue”. Se trata de una gestión administrativa y de un derecho más que de una acción.

Sr. Presidente. — Se va a leer.

— Se lee:

“Art. 34. — El derecho para pedir la jubilación se extingue a los cinco años a contar desde el día en que dejó el servicio.

— Se aprueba

Sr. Zabala. — El artículo 34 del proyecto pasa a ser 35.

Voy a proponer a este artículo la siguiente redacción, que pido se lea.

— Se lee:

“Art. 35. — La jubilación es vitalicia y el derecho a percibirla sólo se pierde por las causas expresadas en esta ley. El jubilado perderá todo derecho a la jubilación si se domiciliase en el extranjero, sin recabar previamente permiso del congreso.”

Sr. Roca. — La comisión acepta.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo observado por el señor senador en la forma leída que lleva el número 34 y que pasa a ser 35

— Se aprueba.

— Se lee el artículo 35, ahora

Sr. Zabala. — Para el artículo 35, que pasa a ser 36, propongo la siguiente modificación: “La conmutación o el indulto no harán renacer los derechos perdidos con arreglo a lo dispuesto en esta ley”.

Sr. Melo. — Yo propondría esta otra forma: “Artículo 36.—La conmutación o el indulto no harán renacer los derechos perdidos, como consecuencia de lo dispuesto en esta ley”.

Sr. Roca. — La comisión acepta la forma propuesta por el señor senador. Melo.

Sr. Presidente. — Se va a votar.

— Se vota y aprueba.

— Se lee el artículo 37, 36 de la comisión.

Sr. Zabala. — Yo propongo que en este artículo 36, después de la palabra “persona”, “cuando el hecho que lo motiva merezca pena de presidio o penitenciaria”.

Sr. Roca. — No hay inconveniente en aceptar la modificación, porque conduce al mismo fin.

Sr. Linares. — ¿Y si el hecho merece pena de prisión?

Sr. Zabala. — La pena de prisión, no es de presidio ni de penitenciaría.

Sr. Linares. — Un empleado ferroviario, que comete un delito contra la propiedad, no puede reclamar su jubilación, hasta que no se resuelva la causa. Eso es lo correcto.

Sr. del Valle Iberlucea. — ¿Por qué ha de ser eso lo correcto, cuando se presume que toda persona procesada, que no ha sido condenada, es inocente? No debe de perder el derecho, sino cuando haya sentencia que lo condene.

Sr. Linares. — El hecho de tener una causa pendiente, presume que hay delito.

Sr. del Valle Iberlucea. — Pero por eso, no puede perder sus derechos.

Sr. Linares. — Pero se debe suspender la jubilación.

Sr. del Valle Iberlucea. — Eso es ir contra la ley fundamental del país.

Sr. Linares. — Supóngase que se le procese por delito de robo, que no está comprendido entre los que merecen

pena de penitenciaría o presidio; en ese caso, hay la presunción de que ha cometido un delito contra la propiedad y no debe de ser jubilado hasta que no se termine la causa.

Sr. Zabala. — La prisión es por causa leve, generalmente.

Sr. Linares. — El robo ejercido sobre la mercadería que se transporta, no es tan leve.

Sr. Roca. — La observación del señor senador, es procedente, por esta razón: existe una concordancia entre el artículo 36 del proyecto de la comisión con el inciso segundo del artículo 33 del mismo proyecto, que ha sido modificado.

El inciso segundo, establece, que no tendrá derecho a ser jubilado el que hubiese sido condenado por sentencia judicial, por delito contra la propiedad, etc., etc. En concordancia con esta sanción, el artículo 36, establece, que no podrá reclamar su jubilación, el que tenga causa criminal pendiente siempre que se proceda por algunos de los delitos expresados en el inciso segundo del artículo 33. Comprende todos los casos. La redacción del señor senador por Jujuy, no comprende el delito contra la propiedad.

Sr. Zabala. — Comprende toda clase de delito, que merezca pena de presidio.

Sr. Linares. — Pero se refiere únicamente a delitos graves.

Sr. Roca. — Es mucho mejor, la redacción del inciso segundo.

Sr. Zabala. — Podría ponerse; por delito contra la propiedad.

Sr. Roca. — Lo que quiere la ley, es, que la condena por delito de otro género, como lesiones, por ejemplo, no hagan perder al causante su derecho a la jubilación.

Sr. Zabala. — Muy bien; puede ponerse entonces, por delito contra la propiedad.

Sr. Roca. — El artículo 36, es puramente suspensivo; no implica la pérdida de la jubilación, solamente se suspende ésta, hasta el momento que se pronuncie sentencia.

Sr. Presidente. — Se va a dar lectura de la forma en que quedará el artículo.

—Se lee:

"Art. 37. — No podrá reclamar su jubilación, el que tenga causa criminal pendiente sobre su persona, cuando el hecho que motivó el proceso merezca pena de presidio o penitenciaría o por delito contra la propiedad."

—Aprobado.

Sr. del Valle Iberlucea. — Pido que conste mi voto en contra, desde el artículo 33 al 37.

Sr. Presidente. — Se tomará nota por secretaría.

—Se lee: artículo 38, 37 de la comisión.

Sr. Esteves. — ¿Por qué no los comprende a los mayores de edad?

Sr. del Valle Iberlucea. — Hasta la edad de 22 años, propondría yo, y a los mayores de edad, si estuviesen imposibilidades para el trabajo.

Me parece que no puede haber inconveniente en aceptar esta modificación.

Sr. Presidente. — ¿La comisión acepta?

Sr. Roca. — Los 22 años.

Sr. del Valle Iberlucea. — ¿Y a los mayores de edad, si estuviesen imposibilitados para el trabajo?

Puede tratarse de una anciana de sesenta años que no pueda trabajar, y ¿por qué no ha de tener derecho a la pensión?

Sr. Roca. — Para expresar todas las observaciones, diré, que una vez redactado el despacho de la comisión, recibimos en el seno de la misma, la visita de la señora Lanteri, actual candidato a diputado al Congreso, que, en representación de la "Asociación de Protección a la mujer", solicitó de la comisión una manifestación, en el sentido de establecer, si los beneficios de esta ley, se acordaban igualmente a los obreros de ambos sexos. La comisión, naturalmente, expresó a la señora Lanteri, que no habiendo distinción en la ley, y refiriéndose ésta, a obreros y empleados en general, comprendía tanto a los obreros varones como a las mujeres.

En el artículo de las pensiones, la señora Lanteri, pidió a la comisión la inclusión de una cláusula, que comprendiera en los beneficios de la pensión al viudo inválido.

Era justo, que si ha sufrido la empleada u obrera el descuento en las mismas condiciones que el hombre, y si esa empleada u obrera, dejara de existir, era un acto de equidad, que el viudo inválido, incapacitado para el trabajo, tuviera los mismos beneficios que la viuda en estos casos.

La comisión consideró justa la solicitud, y le prometió la inclusión que se pedía, como lo hago ahora, en nombre de la misma.

De manera, que deberá decir: “La viuda, el viudo inválido, los hijos, los padres y, a falta de éstos, las hermanas solteras del causante, hasta la edad de 22 años.

Sr. del Valle Iberlucea. — Y las mayores de edad, si estuviesen imposibilitadas para el trabajo.

Sr. Roca. — Y las mayores de edad, si estuviesen imposibilitados para el trabajo.

Sr. Presidente. — Se va a leer con las modificaciones.

—Se lee:

“Art. 38. — En los mismos casos en que con arreglo a esta ley haya derecho a gozar de jubilación y ocurra el fallecimiento del empleado u obrero, tendrán derecho a pedir pensión en la proporción y condiciones establecidas en este capítulo; la viuda, el viudo inválido, los hijos o en su defecto los padres, y a falta de éstos, las hermanas solteras del causante hasta la edad de 22 años y las mayores de edad impedidos para el trabajo.

Si el fallecido hubiese sido ya jubilado, las personas enumeradas en el párrafo anterior tendrán derecho a pensión en las condiciones establecidas en los artículos siguientes, sin más trámite que el de justificar su personería, acreditar la existencia de la jubilación de conformidad a esta ley y observar los requisitos por ellos establecidos.”

Sr. Presidente. — Se va a votar.

—Se vota y se aprueba.

Sr. Prosecretario Guzmán Rodríguez. (*Legend*). — Artículo 39, antes 38. “El derecho de gozar de la pensión entre las personas mencionadas en el artículo anterior corresponderá en el orden siguiente: 1.º — A la viuda en “o concurrencia con las hijos...

Sr. del Valle Iberlucea. — A la viuda o viudo.

Sr. Melo. — Si se van a ir proponiendo modificaciones por incisos, voy a enunciar una, con relación al primer apartado de este artículo. Dice ese apartado: “el derecho a gozar de la pensión entre las personas mencionadas en el artículo anterior, corresponderá en el orden siguiente”. Propongo agregar después de “corresponderá” las palabras “desde el día del fallecimiento del causante, y se otorgará en la forma y orden siguiente”:

Con estas palabras, resultará aclarada una situación que puede discutirse, o sea desde cuándo se concederá la pensión, y me parece que lo lógico y justo es otorgarla desde el fallecimiento del causante.

Sr. Roca. — Sí, señor senador, la comisión acepta.

Sr. Prosecretario Guzmán Rodríguez. — (*Continuando la lectura*) “... corresponderá desde el día del fallecimiento del causante y se otorgará en la forma y orden siguiente: primero, “a la viuda en concurrencia, con los hijos...”

Sr. del Valle Iberlucea. — Sean estos legítimos o naturales.

Me parece que no debe haber diferencia de ninguna clase, en cuanto se refiere al goce de la pensión, entre hijos legítimos y naturales. En la última parte de este artículo, se halla una disposición, según la cual gozarán de la pensión los hijos naturales con arreglo a la legislación civil vigente. Entiendo que tratándose de una pensión no debe existir la diferencia que establecen las leyes civiles entre esas dos clases de hijos.

En consecuencia, hago indicación de que se agreguen las palabras “sean estos legítimos o naturales”.

Sr. Roca. — Pido la palabra.

La comisión no puede aceptar esta modificación, porque ella es demasiado substancial para plantearla incidentalmente en esta forma. La comisión, como la cámara de diputados, al sancionar el proyecto, no han hecho más que respetar sobre este punto las disposiciones de la legislación civil. A su hora.

vendrá o no la reforma, pero me parece que el procedimiento que ha adoptado la comisión, es el que más ajusta a un buen método de legislación.

Sr. del Valle Iberlucea. — Debo decirle al señor senador, a propósito de ese criterio, que se han introducido en casos análogos disposiciones que modificaban la legislación civil en su parte fundamental. Así, al sancionarse la ley que creaba la caja de ahorro postal, se otorgó a la mujer casada el derecho de depositar y retirar sus ahorros.

Yo quiero, al votar este artículo, salvar una cuestión de principios, y por eso hago la indicación.

Sr. Melo. — Hago notar que en el inciso primero se deben agregar las palabras "viuda y viudo incapacitado para el trabajo", para mayor corrección y claridad, sustituyendo la o por y.

Sr. Roca. — La comisión acepta el agregado de "viuda y viudo incapacitado para el trabajo".

Sr. Esteves. — Debe ponerse "incapacitado", porque puede haber inválidos que no estén incapacitados.

Sr. Melo. — Por eso he propuesto "viuda y viudo incapacitado para el trabajo".

Sr. Roca. — Perfectamente, no hay inconveniente.

Sres. Melo y Linares. — ¿Cómo quedaría entonces?

Sr. Prosecretario Guzmán Rodríguez. (Leyendo). — Artículo 39. "El derecho a gozar de la pensión entre las personas mencionadas en el artículo anterior corresponderá desde el día del fallecimiento del causante y se otorgará en la forma y orden siguiente:

1o. A la viuda y al viudo incapacitado para el trabajo en concurrencia con los hijos.

2o. A los hijos solamente.

3o. A la viuda en concurrencia con los padres del causante, siempre que éstos estuviesen exclusivamente a cargo de aquél.

4o. A los padres que se encuentren en las condiciones del inciso anterior.

5o. A las hermanas solteras del causante que se encuentren en las condiciones de los padres.

Los hijos naturales reconocidos o

declarados tales por sentencia judicial, gozarán de la parte de pensión a que tengan derecho con arreglo a la legislación civil."

Sr. Presidente. — Se va a votar en la forma leída.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 40, 39 de la comisión.

Sr. del Valle Iberlucea. — Pido la palabra.

Me parece que por una razón de equidad, corresponde que la pensión se fije en una cantidad mayor que la establecida en el artículo 39.

Yo creo, que desde el momento que quedan la viuda e hijos desamparados a la muerte del obrero ferroviario, en justicia corresponde que puedan disponer de una pensión por lo menos del 75 o/o no quiero entrar en mayores consideraciones para no demorar la sanción de esta ley, pero propongo que en lugar del 50 o/o que fija el artículo, se establezca el 75 o/o como pensión.

Sr. Roca. — Pido la palabra.

Significando la misma sobriedad que el señor senador por la capital, debo manifestar que la comisión ha estudiado estas pensiones, y que no es posible, extender los límites establecidos, y por esta razón, se vé en el caso de mantener su despacho.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo de la comisión.

— Se vota, y resulta afirmativa.

—Se leen y aprueban sin discusión, los artículos 41, 42, 43, 44, 45 y 46 ó sea 40, 41, 42, 43, 44 y 45 de la comisión.

Sr. Zabala. — Se ha sancionado el artículo 42, tal cual, está en el despacho de la comisión, pero debe suprimirse en él las palabras que dicen: "se pierde por las causas establecidas en el inciso 2o. del artículo 33".

Debe decir: "las pensiones vitalicias y el derecho a percibir las solo se pierde, por las causas establecidas en el artículo 46 de esta ley para la pérdida de la jubilación".

Sr. Roca. — No hay inconveniente.

Sr. Presidente. — Se hará la corrección.

—Se lee el artículo 47, 46 de la comisión.

Sr. Melo. — Propondría, que se agregue, también, al viudo, porque el viudo puede contraer segundas nupcias, y las mismas razones que militan para privar de la pensión a la viuda en ese caso existen para privarlo al viudo.

Sr. Torino. — ¿Y el padre y la madre en qué condiciones quedan? por que aquí, por algún olvido, se le ha omitido, pues dice, para la viuda; y el doctor Melo, propone para el viudo; y luego dice “y madre” cuando debe de ser madre y padre.

Sr. Roca. — Para el padre es una nueva carga, mientras que para la madre, no, porque es de presumirse, que si la madre contrax nuevas nupcias lo hará con un hombre que esté en condiciones de sostenerla, mientras que el padre contrayendo nuevas nupcias tiene una nueva carga.

Sr. Torino. — Esa será la presunción lógica, pero no es lo que ocurre en la práctica.

Sr. Presidente. — Se va a leer.

—Se lee

“Art. 47. — El derecho de la pensión se extingue:

- 1o. Para la viuda, viudo o madre, cuando contrajere nuevas nupcias.
- 2o. Para los hijos, desde que llegasen a la edad de diez y ocho años.
- 3o. Para las hijas o hermanas solteras desde que contraigan matrimonio.
- 4o. En general por vida deshonesta, vagancia o por domiciliarse en el extranjero sin permiso previo del congreso.

—Aprobado

—Se lee el artículo 48, 47 de la comisión.

Sr. Melo. — Pido la palabra.

Con la misma sobriedad, con que se viene tratando esta ley, y mirando la situación de empleados, que han prestado servicios con anterioridad a la época en que se ordenó el descuento forzoso, voy a someter a la consideración del honorable senado una medida

de modificación a la redacción de este artículo, que es la siguiente:

“Los empleados y obreros con derecho a jubilación, pero que por haber prestado servicios con anterioridad a la fecha en que se ordenó el descuento forzoso a que se refiere el inciso 1o. del artículo 9o. de esta ley, o por cualquier otro motivo, no hayan concurrido a la formación del fondo de la caja con el 3 o/o” de todos los sueldos percibidos durante el número de años acreditados para acogerse a sus beneficios, sufrirán un descuento del 10 o/o en sus jubilaciones hasta reintegrar al fondo de la caja una suma igual al 3 o/o percibidos desde el 1.º de octubre de 1915, fecha en que empezaron los descuentos por la ley de 1o. de enero de 1913.

Sr. Esteves. — Así es, que se vuelve a bajar del 5 o/o al 3 o/o.

Sr. Melo. — Pero es para un grupo de empleados, que no es muy numeroso. La comisión podrá manifestarnos, si es posible, esta mejora con relación a tales empleados. Ahora, si la comisión cree que se trata de una reforma fundamental y que desequilibraría la situación de la caja, no insistiré.

Sr. Roca. — Pido la palabra.

La dificultad está en poder saber el monto, porque habría que hacer para ello cálculos de lo que significa y representa esa reforma, que cambia el 5 o/o por el 3 o/o con relación a los años en que no se han efectuado los descuentos que determina la ley número 9653. Probablemente, van a concurrir desde el primer momento un número aproximado a cinco mil empleados a solicitar jubilación, empleados que no habrán sufrido el descuento del 3 o/o en los pocos años que median desde la sanción de la ley número 9653, y el momento actual. Puede ser muy bien que la suma que esta reducción representa sea de importancia y pueda influir en el mecanismo mismo de la jubilación. Como el descuento será de un 10 o/o sobre el monto de las jubilaciones acordadas, hasta integrar la cantidad que representa el 5 o el 3 o/o, la cuestión para estos empleados sería el número de años que habrían de sufrir estos descuentos. De modo, que

por lo pronto, no habrían de obtener ningún beneficio inmediato, puesto que el 10 o/o ha de ser sobre la jubilación, y puede ser muy bien, que antes de integrar el importe del 5 o del 3 o/o, muchos hayan fallecido.

No veo la ventaja inmediata que pueda determinar la reforma propuesta por el señor senador.

Sr. Melo. — Un grupo de ferroviarios que estuvo a verme, me explicó que había un núcleo de empleados en las condiciones a que he aludido, y que para ellos significaba una mejora, pero no es mi propósito detener la sanción de esta ley planteando cuestiones nuevas.

Si la comisión no tiene un juicio definitivo, no voy a insistir, sin perjuicio de que, en la revisión, oportunamente, se incorporen la modificaciones referidas en cuanto sean justas. Nada más.

Sr. Presidente. — Se va a votar el despacho de la comisión.

—Se aprueba.

—Se lee el artículo 49 (antes 48).

Sr. del Valle Iberlucea. — Rogaría a la comisión me informara sobre la situación en que quedan, respecto al goce de la pensión, los parientes que, de acuerdo con el artículo 38, tengan derecho a ella, cuando se trate de empleados u obreros ferroviarios fallecidos después del 1.º de enero de 1913 y hasta la promulgación de esta ley.

Yo creo que esas personas deben gozar también de pensión, como la gozarán también las personas vinculadas por el parentesco establecido en esta ley a los empleados y obreros destituidos después de la misma fecha. En el caso de que no estuvieran incluidos, yo propondría el siguiente agregado. Después de las palabras: "en las mismas condiciones podrán obtener pensión las personas a que se refiere el artículo 37", propongo se agregue lo siguiente: "como también cuando los causantes hubiesen fallecido con posterioridad al 1.º de enero de 1913 y antes de la promulgación de la presente ley".

Sr. Roca. — En realidad, no veo inconveniente para que este beneficio alcance también a las personas que se encuentran en la situación a que ha hecho referencia el señor senador por la capital.

Sr. del Valle Iberlucea. — Yo creo, que esta implícito en esta ley, como me decía uno de los diputados que más contribuyeron a su sanción — el señor Zaccagnini, — pero convendría aclararlo en esta forma.

Sr. Roca. — La comisión no tiene inconveniente en aceptar el agregado que propone el señor senador.

Sr. Presidente. — Se va a leer con la modificación.

—Se lee:

"Art. 49. — Los empleados y obreros que con anterioridad al vigor de esta ley, y a partir del 1.º de enero de 1913 hubiesen sido destituidos por causas no previstas por esta ley, tendrán derecho a los beneficios que ella acuerda, con un 10 por ciento de descuento.

En las mismas condiciones podrán obtener pensión las personas a que se refiere el artículo 38, como también cuando los causantes hubiesen fallecido con posterioridad al 1.º de enero de 1913 y antes de la promulgación de la presente ley."

—Se aprueba.

—Se leen y aprueban los artículos 49 y 50 de la comisión que pasan a ser 50 y 51, respectivamente.

—Se lee el artículo 51 de la comisión que pasa a ser 52.

Sr. Iturbe. — Pido la palabra.

Cuando la comisión de legislación, de que formo parte, preparaba la redacción de este despacho, se apercibió de que el proyecto sancionado por la cámara de diputados, no contemplaba de una manera exacta la situación en que quedaban colocados los actuales empleados y obreros de los ferrocarriles del Estado, que, por virtud de esta ley, pasan a ser regidos por ella.

En virtud de esa consideración habíamos propuesto un agregado al artículo que está en consideración, por el cual se establecía que el personal de los ferrocarriles del estado, que al promulgarse la presente ley tuvieran

veinte años o más de servicios en la administración, quedarían sujetos al régimen de la ley 4349. Pero estudiado nuevamente y con más detenimiento este punto, hemos encontrado que el agregado propuesto tampoco respetaba de una manera equitativa los legítimos derechos adquiridos por los empleados y obreros ferroviarios del estado.

Después de haber escuchado la opinión de los propios interesados, y de haber consultado el texto de ley de jubilaciones de empleados nacionales civiles, la comisión ha llegado a la conclusión de que el artículo debe sancionarse en los términos siguientes, de que se servirá dar lectura la secretaría.

Sr. Presidente. — Se va a dar lectura del artículo tal como queda, en sustitución del de la comisión.

—Se lee:

“Art. 52. — Los actuales empleados y obreros de la nación sujetos al régimen de la ley 4349 y a quienes la presente comprende en sus disposiciones, podrán optar dentro del término de tres meses de su vigencia por los beneficios de esta ley, o por los de la ley 4349. La caja nacional de jubilaciones y pensiones civiles, transferirá a la de los empleados ferroviarios, los aportes del personal que de acuerdo con el párrafo anterior, optasen por acogerse a los beneficios de la presente en las condiciones que convenga a las respectivas administraciones o que resuelva el poder ejecutivo si no hubiera al respecto un acuerdo expreso.”

Sr. Presidente. — Se va a votar.

—Se vota y se aprueba.

—Se lee el artículo 53, 52 de la comisión.

Sr. Melo. — Pido la palabra.

Para proponer que se agregue: inembargable. El artículo entonces quedaría así: “las jubilaciones y pensiones son inembargables e inalienables; y en el segundo apartado propondría la sustitución de una palabra para que quedara así: “será nula toda venta, cesión, o constitución de derechos que recaigan sobre ellas, en vez de “que se encierren sobre ellas”.

Sr. Roca. — No hay inconveniente, por más que la ley general ya trata de la inembargabilidad de los sueldos.

Sr. Melo. — Voy a leer entonces cómo quedaría el artículo: “las jubilaciones y pensiones son inembargables e inalienables. Será nula toda venta, cesión o constitución de derechos que recaigan sobre ellas y que impida su libre disposición por el titular de la misma”.

—Asentimiento.

Sr. Presidente. — Queda aprobado en esa forma el artículo.

—Se lee el artículo 54, 53 de la comisión.

Sr. Melo. — Pediría también, que donde dice: “su personal”, se sustituyan estas palabras “por el personal”, porque de otra manera, podría entenderse, que es el personal del directorio de la caja.

Sr. Roca. — Perfectamente.

Sr. Presidente. — Se va a leer.

—Se lee:

“Art. 54. — Las empresas ferroviarias estarán obligadas a suministrar al directorio de la caja todas las informaciones que solicite sobre el personal y a permitir las comprobaciones que juzgue pertinente, bajo apercibimiento y pena de multa variable entre 500 y 2.000 pesos.”

Sr. Presidente. — Se va a votar.

—Se lee el artículo 55, 54 de la comisión.

Sr. Melo. — En este artículo debe haberse suprimido la palabra “estatuido”. Debe decir... “o estatuidos por el artículo de esta ley, etc”.

Sr. Roca. — Se trata de un error de imprenta; hay varios en la redacción de esta ley.

Sr. Presidente. — Se va a leer.

—Se lee:

“Art. 54. — Las empresas ferroviarias que no depositaran en el tiempo y forma estatuidos por el artículo 10 de esta ley, las sumas a que están obligadas con sujeción a la misma, previa intimación del presidente del directorio de la caja, incurrirán en una multa de mil pesos por cada

día de demora hasta tanto efectúe el depósito con el interés del 7 por ciento anual a contar desde el primer día de la mora.

El presidente del directorio tendrá personería suficiente para promover ante el poder ejecutivo o los tribunales de justicia, por vía de apremio, las acciones ejecutivas que correspondan hasta hacer efectivas las obligaciones y penalidades de esta ley.

Las resoluciones del directorio asentadas en el libro de actas y aprobadas, constituyen instrumento público."

—Aprobado.

—Se lee el artículo 56, antes 55.

Sr. Linares. — Pido la palabra.

Tengo una duda respecto de este artículo: ¿cuál es el aporte que deben hacer los gobiernos de provincia que se acojan a los beneficios de esta ley? En la ley que estamos sancionando no se establece para los gobiernos ningún aporte, mejor dicho, se establece para el gobierno de la nación un aporte ilimitado, indefinido, que es el que resulta de los déficits que arrojan las erogaciones de la caja.

De manera que no me explico a qué se refiere.

Sr. Roca. — Se refiere a los aportes que hagan los gobiernos empresarios; es decir, los gobiernos propietarios de ferrocarriles, tendrán a título de empresarios que contribuir con el 8 o/o, que representa el monto de los sueldos de su personal. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, propietaria del ferrocarril a Meridiano V, si se acogiera a la situación de esta ley, tendría que aportar en ese carácter a la administración de la caja el 8 o/o que le corresponde. No tiene otro alcance el artículo.

Sr. Linares. — De manera, que cuando el gobierno no es propietario.

Sr. Roca. — No tiene que aportar absolutamente nada.

Sr. Presidente. — No habiendo más observación queda aprobado el artículo.

—Se leen y aprueban, sin observación, los artículos 57 y 58, antes 56 y 57.

—Se leen los artículos 58 y 59 de la comisión.

Sr. Ministro de Obras Públicas. —

En la parte final del primer apartado de este artículo, debe salvarse un error: en lugar de "confirmada", debe decir "conformada", es decir, con conforme de la dirección.

Sr. Zabala. — Pido la palabra.

La redacción de este artículo, me ofrece alguna duda, señor presidente. Me parece que la autorización que acuerda a las empresas, viene a derogar disposiciones de gran importancia, consignadas en la ley general de ferrocarriles, relativas a algunas condiciones que se exigen a las empresas sobre la forma de hacer elevación de sus tarifas. Así, por ejemplo, quedan las empresas autorizadas, por este artículo, para aumentar sus tarifas sin sujeción a los requisitos que imponen las leyes 2873 y 5315.

Agrega, además, esta otra frase, que tiene una latitud muy grande: "y con prescindencia de sus demás disposiciones". Uno de los artículos que vendría a ser derogado por esta disposición, es el artículo 33 de la ley general de ferrocarriles, que establece que las tarifas relativas al transporte de las personas y al exceso de equipajes, deberán comunicarse a la dirección general de ferrocarriles nacionales y ponerse en conocimiento del público en la forma prescripta para los horarios.

Esta es una de las condiciones que deben llenar las empresas, hacer saber al público, a la dirección general de ferrocarriles que van a hacer un aumento. De manera que por el artículo que se propone, queda todo esto, suprimido cuando dice "y con prescindencia de las demás disposiciones de la ley", es decir, que las empresas quedan facultadas a hacer los aumentos de las tarifas, derogándose así las disposiciones que he mencionado y todas las que son correlativas. Por ejemplo, el artículo 44, que ha servido como punto de partida al poder ejecutivo para reglamentar el trabajo de los ferroviarios, dice: "las empresas comunicarán a la dirección de ferrocarriles y publicarán las tarifas y reglamentos que establecieren para el transporte de mercaderías en la forma indicada por la tarifa y reglamentos de pasajeros.

Los cambios que se introdujeran se pondrán en conocimiento del público un mes antes de su vigencia”.

¿Están autorizadas las empresas para no ponerlo en conocimiento del público o las autoriza a proceder sin sujeción a las demás disposiciones de la ley?

El artículo 44 se refiere a tarifas de transporte, y establece que serán razonables y justas.

Tengo entendido, que este artículo ha sido invocado por el P. E. en diversos decretos que ha dado, y que ha sido el punto de partida para intervenir en la fijación de las tarifas.

Hay otro artículo, el 49, que establece: “las tarifas serán uniformes para todos los que se sirvan del ferrocarril. Sin embargo, la empresa podrá reducir los precios de tarifa en favor de los cargadores que aceptasen plazos más largos que los que correspondiesen, según el orden del registro, o de los que se obliguen a proporcionar, en períodos dados, un mínimum de toneladas de carga. La concesión a uno o muchos remitentes será extensiva a todos los que la pidan, sujetándose a iguales condiciones, y no podrá hacerse sin previa aprobación de la dirección de ferrocarriles”.

¿Queda también derogada esta disposición?

Yo quisiera conocer la opinión del P. E. sobre esta disposición tan lata de este artículo, que tiene una redacción que comprende y deroga las disposiciones de la ley general de ferrocarriles, y aún de la ley Mitre.

No tengo artículo que proponer en reemplazo; pero desearía conocer la opinión del P. E. respecto de esta disposición.

Sr. Ministro de Obras Públicas. — Pido la palabra.

El P. E. no ha entendido en forma alguna dar a este artículo la latitud que el señor senador le asigna.

El único propósito a que responde la redacción del artículo, en los términos en que está, es al de eliminar las dificultades que podrían tener las empresas, para obtener de inmediato los recursos que necesiten, a fin de poder

hacer frente, a la erogación que les demanda esta ley.

De manera que el único y exclusivo alcance que tiene las disposiciones de esta ley cuando dice: “sin sujeción a los requisitos que imponen las leyes 2873 y 5315”, se refiere a la publicidad de las tarifas, y términos para su vigencia, y eso se podría subsanar, agregándole: “sin sujeción a los requisitos que imponen las citadas leyes de publicidad y término para su vigencia”. Es decir para la vigencia de esta tarifa.

Ahora en la parte que el señor senador cree encontrar una derogación de las disposiciones de la ley general de ferrocarriles pertinentes a la facultad ejecutiva, de controlar las tarifas, hasta obtener que ellas sean justas y razonables, y aquellas disposiciones que se refieren a la uniformidad de las mismas, me permito observar que no puede entenderse en una forma tan lata ese artículo, que importe la derogación de esas disposiciones, es por esta excepción que se hace a la ley general de ferrocarriles y a la ley 5315, es decir para que las empresas puedan disponer la forma de obtener el aporte con que han de concurrir, y desde luego con el control que establece el mismo artículo, obligándoles a llevar una cuenta especial, de esta elevación también especial y única de tarifas como que es al solo objeto de constituir su aporte.

De manera que no veo en la redacción del artículo el peligro que el señor senador señala, hecha la salvedad que acabo de enunciar, es decir, restringir esa facultad, que se acuerda a las empresas en el sentido de que, como una excepción, quedan desobligadas a dar a la publicidad durante el término que la ley general de ferrocarriles establece para su vigencia, la elevación de la tarifa al sólo objeto de constituir su aporte.

Si con esta explicación no queda aclarado el texto del artículo sería el caso de aclararle dándole otra redacción.

De manera que si el señor senador no está conforme con las explicaciones que he dado, sería el caso de darle una

nueva redacción que restrinja siempre el artículo al único propósito a que responde; es decir el de dar facilidades a las empresas para que consigan a la mayor brevedad los fondos necesarios para constituir su aporte.

Sr. Zabala. — Pido la palabra.

Yo creo necesario corregir la redacción del artículo porque deroga disposiciones esenciales y lo dice categóricamente y con una amplitud extraordinaria. Las empresas gozarán de esas facultades con presencia de las demás disposiciones de las leyes a que se refiere. La indicación que hace el señor ministro de suprimir precisamente la publicidad a que la ley de ferrocarriles obliga a las empresas, cada vez que van a hacer un aumento de las tarifas, no me parece conveniente, pues obrando dentro de las disposiciones de las leyes que se derogan, las empresas pueden hacer el aumento sin perjudicarse en lo más mínimo, sufriendo un ligero retardo, en todo caso, mientras que las disposiciones del artículo le da intervención al poder ejecutivo recién al año de ser hechos los aumentos de las tarifas, lo que va a ser una intervención tardía, y es necesario vigilar los intereses públicos.

Por esto es que yo creo que deben de cumplir las disposiciones del artículo que garantizan los intereses generales. Esto no es crear dificultades a las empresas, sino garantizar los intereses generales y tratar de que ellas procedan de acuerdo con las disposiciones de la ley general de Ferrocarriles y yo propongo que las empresas hagan esos aumentos de acuerdo con lo dispuesto en la referida ley general de ferrocarriles.

Sr. del Valle Iberlucea. — Pido la palabra.

Yo creo que tiene razón el señor senador por Jujuy, doctor Zabala, y que no es este el momento de modificar leyes fundamentales que establecen el régimen ferrocarrilero del país, como son la ley general de ferrocarriles y la ley Mitre. Para aclarar todas las dudas y dificultades a que acaba de hacer referencia el señor senador por Jujuy, me parece que lo más justo, lo más conveniente y lo

más correcto es votar, en lugar del despacho de la comisión, el artículo tal cual viene en el proyecto de la cámara de diputados, artículo que establece que todos los aportes y gastos que las empresas hagan para el cumplimiento de esta ley serán considerados como gastos de explotación a los efectos de la ley 5315.

No quiero hacer mayores consideraciones para refutar parte de las razones dadas por el señor senador por Salta, doctor Linares, respecto de las utilidades y de la situación de las empresas ferroviarias, porque es necesario terminar de una vez por todas con la consideración de esta ley; sólo quiero salvar mi voto, dejando constancia de que votaré en contra del despacho de la comisión, y para el caso de que fuera este rechazado, pido que se vote el artículo 59 del proyecto de la cámara de diputados.

Sr. Melo. — Pido la palabra.

También para dejar constancia de que votaré en contra del despacho de la comisión, pues atribuyo la misma gravedad que el señor senador por Jujuy a la redacción aceptada por la comisión al artículo 58 por sus consecuencias. No creo que esas consecuencias puedan salvarse con las aclaraciones propuestas por el señor ministro, porque de la redacción del artículo resulta que no se trata de una autorización que se da por una sola vez a las empresas, y afirmo esto porque al final del apartado propuesto figuran las siguientes frases: "A esos efectos quedan obligadas a llevar una cuenta especial cuyo movimiento deberán hacer conocer anualmente de la dirección general de ferrocarriles, la que será examinada y confirmada por ésta a los efectos del artículo 53 de la presente ley".

De manera que la autorización que se da a las empresas para proceder a aumentar las tarifas sin sujeción a los requisitos que imponen las leyes 2873 y 2315, no es por una sola vez ni propende a remediar únicamente la situación creada por esta ley. Es una autorización que comprende también situaciones futuras. El artículo viene, pues, a abrir las puertas a las empre-

sas para poder aumentar y modificar sus tarifas sin publicidad y para aplicar, dentro de las tarifas, criterios que, como hizo notar el señor senador por Jujuy, ha condenado el poder ejecutivo en una forma categórica.

Recuerdo, entre otros casos, el decreto dictado por el poder ejecutivo relativo a las tarifas diferenciales establecidas por el ferrocarril del Sur, para hacer la competencia a empresas de navegación a los puertos de Mar del Plata y Bahía Blanca. En ese caso, el poder ejecutivo, haciendo suyos los fundamentos de un meditado dictamen del procurador general de la nación en ese tiempo, doctor Kier, estableció que si el mismo congreso tiene limitaciones de orden constitucional para establecer cargas en el sentido de que ellas sean uniformes y proporcionalmente iguales, esas limitaciones lógicamente debían alcanzar a las empresas a quienes se hubieran otorgado concesiones por los poderes públicos.

El artículo que se proyecta viene, pues, a suprimir el régimen de publicidad y control y a colocar en manos de las empresas ferroviarias la facultad de aplicar y sancionar tarifas prescindiendo de los requisitos establecidos en la ley.

Es por todo esto que considero que la disposición de este artículo importa una reforma muy grave en nuestro régimen ferrocarrilero y, por consiguiente, yo voy a votar en contra si se mantiene la redacción y no se llega a otra que permita dentro de lo justo que las empresas puedan sin daños realizar los aportes que la ley consagra.

Sr. Ministro de Obras Públicas. — Pido la palabra.

Insisto en la interpretación que he dado al alcance de este artículo en cuanto no importa la derogación de la ley de ferrocarriles.

No debe olvidarse que se circunscribe esta franquicia al sólo objeto de formar el fondo de jubilaciones con el control de la dirección de ferrocarriles, que impedirá, en todo momento, esos aumentos discrecionales que temen los señores senadores preopinantes, que de-

jan entrever que quedará en poder de las empresas como una facultad indiscutible y, por consiguiente, derogatoria de las leyes números 5315 y 2783.

La interpretación, en mi concepto, dentro de la forma, si se quiere deficiente de la redacción del artículo, no autoriza esas conclusiones en el sentido de dar facultades a las empresas, que pueda en momento alguno reconocerles el poder ejecutivo.

Creo, por consiguiente, que no puede haber dificultad en eliminar la parte a que se refieren los señores senadores preopinantes, y quedaría el artículo en esta forma:

“A los efectos de la contribución que esta ley fija a las empresas en el inciso 4o. del art. 9o., quedan éstas autorizadas para aumentar sus tarifas; en la proporción necesaria a satisfacer el aporte que respectivamente les corresponda”.

De modo que quedaría suprimida la parte objetada por los señores senadores que dice: “... sin sujeción a los requisitos que imponen las leyes 2873 y 5315 y con prescindencia a sus demás disposiciones”. Y continuaría el artículo: “quedan estas autorizadas para aumentar sus tarifas en la proporción necesaria a satisfacer el aporte que respectivamente les corresponda”. El resto del artículo se refiere al control que se reserva el gobierno para que esa elevación de tarifas no exceda, en ningún momento las proporciones estrictamente necesarias para cubrir el aporte que esta ley les impone.

Sr. Roca. — Pido la palabra.

La comisión, por lo menos — estoy pluralizando — en este caso, el senador que habla, está de acuerdo con la modificación que acaba de proponer el señor ministro; no, porque le diera el alcance de gravedad y de peligro que le atribuían los señores senadores preopinantes a la prescripción contenida en el despacho de la comisión, y que no ha sido una exigencia de las empresas, sino, al contrario, una iniciativa del señor ministro de obras públicas...

Sr. Ministro de Obras Públicas. — Ha sido redactada por mí.

Sr. Roca. — Ha sido propuesta por

el señor ministro a la comisión en el deseo de crear un procedimiento dentro de la ley que, aceptando como base la facultad del aumento de las tarifas, que es esencial en la ley, que es básico en la ley, permitiera hacer esta modificación en términos más fáciles y más rápidos de lo que autoriza el mecanismo orgánico de la ley de ferrocarriles y de la ley Mitre.

Por esa razón, y siendo siempre permanente el control del poder ejecutivo, y estando perfectamente establecido el propósito de la derogación transitoria de las disposiciones de esa ley...

Sr. Ministro de Obras Públicas. — Si me permite, — de la suspensión.

Sr. Roca. — ...no podían presentarse en la práctica las dificultades y peligros que se han enunciado. Pero me parece que, ya que ellos han sido considerados en tales condiciones por algunos señores senadores — cuyas opiniones autorizadas la comisión respecta — debo declarar que desaparecerían con la supresión propuesta por el señor ministro.

De modo que adhiero, por mi parte, a la modificación propuesta por el señor ministro de obras públicas.

Sr. Zabala. — ¿Queda suprimida la publicidad...?

Sr. Roca. — A los efectos de la contribución que esta ley fija a las empresas en el inciso 4o. del artículo 9o., quedan autorizadas para aumentar sus tarifas...

Sr Melo. — En esa forma no se afectan ya las otras leyes generales.

Propondría, además, que en lugar de expresarse en este artículo "A ese efecto quedan obligadas a llevar una cuenta especial cuyo movimiento deberán hacer conocer anualmente de la dirección general de ferrocarriles", etc., se diga "abriendo una cuenta especial, cuyo movimiento deberán hacer conocer a la dirección de ferrocarriles", porque las palabras "A ese efecto" se referían a las cláusulas suprimidas.

La redacción completa de este artículo quedaría así: "A los efectos de la contribución que esta ley fija a las empresas en el inciso 4o. del art. 9o.

quedan éstas autorizadas para aumentar sus tarifas, en la proporción necesaria a satisfacer el aporte que respectivamente les corresponda abriendo una cuenta especial cuyo movimiento deberán hacer conocer de la dirección general de ferrocarriles, la que será examinada y confirmada por ésta a los efectos del art. 53 de la presente ley".

Sr. Ministro de Obras Públicas. — De manera, que el señor senador le suprime el período, en que estas empresas están obligadas a hacer conocer anualmente el movimiento de esa cuenta a la dirección general de ferrocarriles.

Debo hacer presente al señor senador, que el hecho de que las empresas estén obligadas a hacer conocer anualmente el movimiento de la cuenta, no afecta en nada la obligación permanente que tienen de aceptar la fiscalización en todo momento de los inspectores de control en las empresas particulares. De manera, que el movimiento de esa cuenta, está siempre controlado por la intervención de esos inspectores.

Sr. Melo. — Suprimía la palabra "anualmente", para que se pudiera ejercer una inspección más permanente.

Sr. Ministro de Obras Públicas. — La ejercitan permanentemente, señor senador. La incorporación de esta expresión, fué solicitada a la comisión por los representantes de las empresas, en razón de las dificultades que para su contabilidad podrían presentarseles si fuera menor el término en que estuvieran obligados a presentarlas.

Sr. Melo. — Si se ejerce una fiscalización permanente, no es necesario quitar la palabra "anualmente".

Sr. Presidente. — Se va a leer el artículo, tal como quedará con la reforma.

--Se lee:

"Art. 59. — A los efectos de la contribución de las empresas quedan éstas autorizadas para aumentar sus tarifas, en la proporción necesaria a satisfacer el aporte que respectivamente les corresponda, abriendo una cuenta especial cuyo movimiento deberán hacer conocer anualmente

de la dirección general de ferrocarriles, la que será examinada y conformada por ésta a los efectos del artículo 53 de la presente ley.

Las empresas de ferrocarriles que no estén regidas por los artículos 8 y 9 de la ley número 5315, y que tengan un régimen diferente de tarifas que el establecido en dicha ley, podrán también aumentarlas hasta alcanzar los límites autorizados por la misma, quedando así sujetas a las disposiciones contenidas en los citados artículos."

Sr. del Valle Iberlucea. — Es necesario votar este artículo, porque he propuesto en sustitución de él, el correspondiente del proyecto de la cámara de diputados.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—Se lee y aprueba el artículo 60, antes 59.

Sr. Roca. — Pido la palabra.

Antes de votar el artículo último, voy a hacer moción de reconsiderar el inciso primero del artículo segundo de esta ley, reconsideración anunciada por mí, al empezar la discusión de la ley, cuando el señor senador por la capital, doctor del Valle Iberlucea, propuso una aclaración respecto a la situación de los empleados de confitería de los ferrocarriles nacionales; y por el deseo de salvar una omisión de la ley, en lo que se refiere, a los empleados del cable carril de Chilecito a la Mejicana, servicios que a las características generales de los servicios ferroviarios hay que agregar, las condiciones especialísimas por la severidad del clima, por la altura y por los peligros de este género de tráfico, que exponen continuamente al personal, por otra parte muy reducido, que no llega en total a una cantidad superior de 110 obreros, con muy pocos empleados de menor categoría. De modo, que propongo, la reconsideración del inciso primero del artículo segundo a fin de agregar en él la cláusula que establece, que quedan comprendidos en las disposiciones de esta ley, los empleados y obreros permanentes de jurisdicción nacional como los que se incorporen al régimen de

la misma, y los de cable carril de Chilecito a la Mejicana.

Y como apartado segundo, establecer que "quedan también comprendidos en las disposiciones de esta ley, los empleados de confitería debiendo computárseles los servicios prestados bajo la dependencia de compañías arrendatarias de las empresas.

Sr. Presidente. — No sé si está suficientemente apoyada la moción de reconsideración.

¿Está apoyada la moción de reconsideración?

—Apoyada.

Sr. Presidente. — Se va a votar si se considera el inciso primero del artículo.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—Se va a leer el artículo 20., con su inciso 10.

"Art. 20. — Quedan comprendidos en las disposiciones de esta ley:

10. Los empleados u obreros permanentes de los ferrocarriles de jurisdicción nacional incluso los de los puertos que existen actualmente en el país o se incorporen al régimen de los mismos y de los que en adelante se establezcan, sea por la nación o por empresas particulares y los del cablecarril de Chilecito a la Mejicana."

Sr. Melo. — Que se vote este primer apartado.

Sr. Presidente. — Perfectamente, se va a votar hasta aquí.

—Se vota, y resulta afirmativa.

Sr. Prosecretario Guzmán Rodríguez. — (Leyendo). — Apartado 2.º — "Quedan también comprendidos en las disposiciones de esta ley los empleados de confitería, debiendo computárseles los servicios prestados bajo la dependencia de compañías arrendatarias de las empresas".

Sr. Presidente. — En discusión.

Sr. Melo. — Pido la palabra.

Desearía que la comisión suministrara algunos informes al respecto, porque quizá este apartado pudiera crear una situación de injusticia; si se pres-

cinde el tiempo en que los restaurants de los ferrocarriles hayan sido explotados por empresas arrendatarias, pues, se le podría imponer a las empresas la carga de jubilar a empleados que no han tomado, por períodos en que ellas no han tenido ningún beneficio de la explotación de los restaurants y confiterías.

Sr. Roca. — Pido la palabra.

La razón de ésta disposición estriba en la circunstancia de encontrarse estos empleados en el servicio ferroviario efectivo, en una categoría que no es inferior en títulos, ni en nada a la de los camareros y otros empleados de categoría similar.

Ahora se presentó esta dificultad: en algún tiempo, especialmente en épocas pasadas, las empresas solían hacer estos servicios por medio de compañías arrendatarias, sistema que hoy todas tienden a abandonar; la mayor parte de los ferrocarriles, los principales, están reemplazando estos servicios, es decir, los están haciendo directamente por administración. Sucede que muchos de los empleados que prestan actualmente servicios en la administración ferroviaria, han sido empleados de las compañías arrendatarias, que hace años prestaban servicios en los mismos ferrocarriles, y como no existe una relación directa entre los servicios y la jubilación que se acuerda, porque una empresa puede estar obligada a jubilar a un empleado que no haya prestado sino un tiempo mínimo de servicios y que haya acumulado los servicios necesarios para obtener la jubilación en otras empresas distintas, se ha pensado que habría una razón de justicia, para no desconocer totalmente los servicios prestados por estos obreros en los ferrocarriles, cuando dependían de las empresas arrendatarias y no de los ferrocarriles mismos.

De manera, que la comisión ha encontrado equitativo acordar estos beneficios a estos obreros y empleados ferroviarios, que no tienen, por otra parte, condiciones muy excepcionales de sueldo, y que por el contrario gozan de sueldos muy bajos; por lo tanto, los beneficios que vendrían a obtener por

esta ley, probablemente serían muy inferiores a los que la situación actual les acuerda.

No sé, si estas explicaciones habrán satisfecho al señor senador, como sería mi deseo.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo en la forma que lo ha despachado la comisión.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 61, 58 antiguo del proyecto de la cámara de diputados.

Sr. Melo. — Pido la palabra.

Para proponer como redacción de este artículo, la siguiente: “Derógase toda disposición que se oponga a las “de esta ley”. — Como todo lo relativo a los ferrocarriles ha sido materia de distintas leyes, en esta forma inadvertidamente, dejaríamos sin efecto preceptos de leyes que hubiera sido el propósito mantener en vigor. Entonces, me parece que lo correcto, y lo prudente, es únicamente poner, que se derogan las disposiciones de otras leyes que se opongan a la presente.

Sr. Presidente. — ¿La comisión acepta la indicación?

Sr. Roca. — Es el mismo pensamiento en el fondo.

Sr. Prosecretario Guzmán Rodríguez. (*Leyendo*). — El artículo 61 quedaría en la siguiente forma: Art. 61. “Derógase toda disposición de otras leyes “que se opongan a la presente”.

Sr. Presidente. — Queda aprobado en esa forma.

El artículo siguiente es de forma.

Sr. del Valle Iberlucea. — Hago indicación de que se comuniqué inmediatamente a la cámara de diputados.

—Asentimiento.

Sr. Presidente. — Así se hará. Queda levantada la sesión.

—Eran las 7 p. m.

PEDRO VARANGOT,
Director de taquigrafos.